

El legado no republicano de Boric

Pablo Eguiguren F.
 Libertad y Desarrollo



Tal como ocurre tras cada elección, todo Chile se enorgullece del eficiente trabajo del Servel y de los ritos que nos demuestran que, pese a lo virulentas que puedan ser las campañas, los perdedores reconocen sus derrotas y quienes logran el respaldo ciudadano actúan de manera conciliadora.

Si bien el 14-D fuimos nuevamente testigos de cómo la democracia chilena funciona, el gobierno ha tomado una serie de decisiones que empañan lo que debería ser un traspaso ordenado y con espíritu republicano del poder.

Todo partió incluso antes de la elección de Kast, cuando el Ejecutivo rompió la tradición de dejar fondos de libre disposición para el gobierno entrante. Es cierto que Chile pasa por una severa estrechez fiscal, pero destinar 0,4% del presupuesto para que el próximo gobierno pudiera financiar sus prioridades no era imposible.

Así ocurrió cuando, en plena pandemia, la segunda administración Piñera dejó US\$460 millones de libre disposición

al actual gobierno. Aunque como proporción del gasto total esa cifra es baja, equivale al 65% del presupuesto de Gendarmería y es dos veces el costo de la licitación para reducir listas de espera de la salud estatal que realizó este gobierno, lo que da cuenta del impacto que esos recursos podrían haber tenido.

Otro tipo de “amarré” es la promoción inconsulta a los partidos políticos de la candidatura de la expresidenta Bachelet a la secretaria general de la ONU. El futuro gobierno deberá pagar los costos políticos, tanto si apoya a la candidatura como si no lo hace, de una aventura de incierta probabilidad de éxito.

Tras la derrota del oficialismo, el fair play tampoco ha estado presente. El acuerdo del gobierno con los gremios de funcionarios públicos, que dificulta el ajuste de funciones y la salidade personal que, por definición, está contratado temporalmente, no hace más que entorpecer la instalación de una nueva administración.

“Una vez terminado su mandato, muchos de los problemas que afectan al país seguirán presentes”.

Además, el acuerdo considera otros cambios legales al personal de confianza que, pudiendo ser necesarios, no es razonable discutirlos en una ley de reajuste ni en las postrimerías de un gobierno que tuvo cuatro años para haber planteado una verdadera reforma al empleo público.

Finalmente, la filigrana del nombre propuesto para encabezar la Defensoría de las Víctimas, institución que recién inicia su funcionamiento en abril próximo, y que recaía en una persona que trabajaría solo unas semanas antes de su pre y post natal, era impresentable. El gobierno lo entendió así y echó pie atrás.

El Presidente Boric tiene el derecho y el deber de gobernar hasta el último día de su gobierno. Una vez terminado su mandato, muchos de los problemas que afectan al país seguirán presentes, algunos incluso agravados durante su administración. La Moneda haría bien en no poner obstáculos para que el nuevo gobierno intente resolverlos.